


CARLOS ROBLES PIQUER

MEMORIA DE CUATRO ESPAÑAS

República, guerra, franquismo y democracia

Prólogo de Manuel Fraga Iribarne

Barcelona, 2011

 Planeta

CAPÍTULO 8

En la brega política

La información y la cultura popular

Comenzaba el verano de 1962, como he dicho antes. Estábamos tranquilos en Londres en las circunstancias ya explicadas.

Se había producido en España una crisis de gobierno, o, más bien, Franco había decidido cambiar a buena parte de sus ministros, que estaban, sin duda, gastados por años de gestión. No poco había pesado en aquel trance lo que el Régimen llamó «contubernio de Múnich» y que consistió simplemente en que políticos españoles de muy diversas tendencias, desde monárquicos juanistas hasta socialistas y nacionalistas, coincidieron en algo obvio: que la incorporación a la naciente Unión (política) Europea exigía que España se acomodara a los moldes democráticos de los demás estados del viejo continente. Los destierros, fuera de España o a una isla periférica, no cambiaban esa realidad. Un importante reajuste ministerial era una respuesta parcial e inevitable.

Era claro en el caso de don Gabriel Arias-Salgado, sin duda muy leal pero pegado a las tradiciones más inmovilistas del Régimen y que, como ministro de Información y Turismo, parece que cargó excesivamente la mano en la denuncia de los de Múnich y les dio, así, mucha importancia ante gran parte de la opinión pública española.

Mi cuñado Manuel iba para ministro de Educación y Ciencia, y aterrizó en aquel otro alto cargo cuando Franco vio que su titular debía ser renovado y era, además, hombre ya muy delicado de salud; tanto que falleció pocos días después. Estuvo claro desde el comienzo que, con Fraga, serían muy profundos los cambios en la casa que alberga hoy al Ministerio de Defensa. Un reconocido experto británico en nuestra historia contemporánea ha resumido así su papel en aquellos años: «Ex-

traordinariamente enérgico y preocupado por situar al Régimen en las nuevas corrientes sociales y culturales, Fraga sería pronto conocido en España y el extranjero como un reformista que impulsaría una ulterior transformación del sistema» (Raymond Carr, *Historia de España Menéndez Pidal*, tomo XLI, p. 107, Espasa-Calpe, S. A., Madrid, 1996, p. 107). Y un historiador norteamericano, Neal Moses Rosendorf, que ha estudiado con cuidado ese período, escribió recientemente («Be El Caudillo's Guest: The Franco Regime's Quest for Rehabilitation and Dollars after World War II via the promotion of U. S. Tourism to Spain», *Diplomatic History*, vol. 30, n.º 3, junio 2006, pp. 367-407) lo que sigue: «Fraga, un destacado miembro de los aperturistas liberalizantes dentro de la burocracia del gobierno español (muchos de ellos miembros de la organización católica Opus Dei), había sucedido al ultraderechista Arias Salgado [*sic*] en 1962. Al revés que Arias Salgado [*sic*], que había mostrado poco interés personal en el Turismo, Fraga hizo de su continua promoción una pieza central de su política.»

Este mismo autor cita un despacho del embajador de Estados Unidos en Madrid, Robert Woodward, de julio de 1962, donde calificaba al recién nombrado ministro como «uno de los altos funcionarios españoles que habla más de prisa, piensa más de prisa y tiene más energía», añadiendo que «su lucidez, su visible rectitud y sus buenas intenciones son impresionantes».

El propio Rosendorf, al final de su estudio, deja caer una frase que, quienes vivimos el experimento desde dentro, sólo podemos confirmar: «Los norteamericanos habían proporcionado gran parte del conocimiento (*know-how*) de la industria turística internacional y muchos turistas de alto nivel económico, los europeos occidentales la mayor parte de los biquinis, y los españoles el abrazo [en español, en el original] de bienvenida; y el fermento que ayudó a que los turistas norteamericanos y europeos pensaran bien de la España de Franco y estimuló también las tendencias políticas y socialmente subversivas, dentro de España» lo que, termina nuestro autor así: «contribuyó a la aparición, en 1978, de una España que fue una democracia embrionaria, un Estado europeo realmente *normal*».

La anterior mención al Opus Dei, por cierto, me lleva a recordar dos hechos: el de que trabajé con gusto y sin dificultades junto a miembros muy destacados de la obra, como en seguida se verá que lo hice con el ministro López-Bravo, y fui gran amigo —ya en Bogotá, luego en España— de otros como el buen arquitecto y mejor persona que fue

Luis Borobio. Siempre he tenido gran respeto por ellos, que sirvieron a España con lealtad y desmintieron con su vida muchas mezquindades que padecieron por ser «del Opus».

No obstante, un día fui interrogado por Eva Jardiel Poncela, hija del gran Enrique y autora de un libro, *¿Por qué no es usted del Opus Dei?*, publicado por ella en 1974. Respondí con tres razones: la primera, la de que nunca me invitaron a serlo, lo que hacía innecesarias las otras dos. Las añadí, sin embargo: como funcionario público, no creía acertado estar sometido a una «disciplina en cuestiones profesionales» que pudiera rozar con aquellos deberes; y temía, además, que los honores y el poder de algunos de sus miembros distorsionaran el camino de perfección que es el allí ofrecido a los católicos. Y quiero constatar mi convicción de que en ninguno de estos riesgos incurrió López-Bravo, el miembro del Opus a cuyas órdenes más tarde trabajé.

Un par de días después, el ya ministro Fraga me llamó por teléfono para ofrecerme la Dirección General de Información. Nos habíamos visto varias veces durante mis años de Nador, sobre todo en un par de almuerzos tranquilos, mano a mano, en restaurantes de los alrededores de Madrid; y estaba yo plenamente de acuerdo con sus ideas renovadoras dentro de un sistema político en el que nos habíamos formado y que, en cualquier caso, parecía entonces inamovible, por los apoyos fácticos con que contaba y porque el pueblo, ahíto de conflictos, no estaba para nuevas aventuras. Tampoco, en nuestra opinión, iba a aceptar para el futuro el «franquismo sin Franco» al que algunos aspiraban. Por lo demás, los juicios emitidos sobre ese largo período son, a veces, simplemente increíbles. Un solo ejemplo: un historiador sin duda serio y responsable afirma con escasa objetividad, a mi modo de ver, que el Plan Marshall no se aplicó a España y no pudo beneficiarla a causa de «la autarquía y las políticas monetaria y comercial»; cuando creo evidente que la causa de esa exclusión fue de naturaleza exclusivamente política (Paul Preston, *El triunfo de la democracia en España, 1969-1982*, Grijalbo, Barcelona, 1986).

Y Franco siguió, mientras Dios le dio vida. Fracasaron todos los intentos de derrocarlo, que tampoco fueron ni muy frecuentes ni muy serios. La oposición careció de fuerza, salvo la del Partido Comunista, muy perseguido por la policía y del que la mayoría de los españoles tenía sobrados motivos para desconfiar. Pero, al tiempo, se habían producido no pocas novedades que iban cambiando por dentro nuestra sociedad. Quienes teníamos hijos lo veíamos con claridad porque, en su gran mayoría, no se sentían movidos por las ideas y las ilusiones, quizá inge-

nuas, que nosotros habíamos asimilado, sino que aspiraban a las libertades políticas y sociales que habían visto en naciones vecinas.

Por otra parte, el propio Régimen tomaba medidas que no podía evitar y que desbordaban su ámbito original. Eso ocurría sobre todo con las de índole económica; quizá, la más influyente fue el plan de estabilización de 1959 y sus consecuencias, que, a corto plazo, supusieron el cierre de empresas, alteraciones en la paz social de un casi pleno empleo —en parte, económicamente artificial, pero cierto— y oleadas de emigración que hubo que regular lo mejor posible, porque los estados europeos, sus destinatarios, no las acogían con la ligereza improvisada con la que han sido aceptados hasta ahora en España los navegantes de los cayucos y las pateras, o los que cruzan fácilmente desde Centroeuropa la frontera pirenaica. (Ligereza que se ha comprobado en cuanto se ha pasado de la prosperidad a la crisis.)

Esta nueva situación significaba que aparecían protestas sociales, al tiempo que llegaban a muchos hogares, enviadas por esos emigrantes o traídas por el incipiente turismo, no sólo remesas dinerarias que ayudaban a quienes aquí se habían quedado, sino también noticias del exterior, más próspero y mucho más democrático, como el ambiente que yo mismo viví en aquellos breves meses de Londres o el que había percibido en Dublín, ya en el verano de 1950. Recuerdo bien conversaciones londinenses con mi citado compañero y amigo Santiago Martínez Caro, muy crítico del inmovilismo español, con quien reanudaría esa cordial relación cuando, años después, a caballo entre las décadas de los sesenta y los setenta, fue director del Gabinete Técnico del ministro López-Bravo, como en otro lugar queda explicado.

El año 1962 era un año más en el franquismo, lo que significaba que faltaba un año menos para los cambios que deberían producirse a su final y sobre los que muchos elucubraban con más imaginación que conocimientos.

Sin embargo, un observador ajeno a las luchas políticas, aunque seguramente conocedor de ellas, el doctor Juan Uriach Marsal, que presidió Farmaindustria creada en aquel año, afirmó veinticinco años después que 1962 y los años subsiguientes fueron «años de crecimiento en todos los órdenes». Lo habían permitido los cambios en la política económica de los tres años precedentes, tanto que, al mismo tiempo, pudo el profesor Juan Velarde afirmar que, con el arancel de 1960 (que substituyó al muy proteccionista de Cambó de 1922), «España abandonó la protección de la *muralla china aduanera*».

Un historiador poco amigo de aquel régimen, Javier Tusell, escribió en el diario *Ya* (28-XI-75) a raíz de la muerte de Franco que, en ese tiempo, «se produjo el máximo impulso modernizador de la sociedad española» y que «ésta ha sido la herencia fundamental que la dictadura nos ha dejado». Otros pueden creer lo contrario y sustentar la teoría de que los cambios internos del Régimen, como el de 1962, no tuvieron nada que ver con la suave llegada de las libertades políticas cuando la monarquía sucedió al franquismo, y que fueron los sindicatos y la universidad los que conquistaron la democracia. Éste es el punto de vista —que no comparto— de un aristócrata comunista y de un muy joven profesor universitario, los señores N. Sartorius y A. Sabio (*El final de la dictadura*, Temas de Hoy, Madrid, 2007). No obstante, ellos mismos aceptan que «durante los años comprendidos entre 1961 y 1974 el Producto Interior Bruto (PIB) español creció de manera sostenida, por encima de la media comunitaria» aunque en seguida quiten importancia a ese hecho que mucho valía para el españolito de a pie.

Otro autor poco amigo de aquel régimen ha reconocido, sin embargo, que aquellos años de prosperidad le permitieron «ampliar su base de legitimación política y social» (Ángel Viñas, *Cuadernos de Historia Contemporánea*, n.º 25, 2003, p. 86).

Un cambio semejante al que se iba dando en nuestra sociedad era necesario en el mundo de las ideas. Y fue la principal razón por la que acepté con gusto la oferta, muy tentadora para cualquiera a quien interesara la política interior y no sólo la exterior, aun con el contrapeso de que me «politizaba» para el futuro y me apartaba temporalmente del servicio exterior profesional. Creí necesario y correcto, no obstante, solicitar la venia de mi jefe, el embajador don José Fernández-Villaverde, marqués de Santa Cruz, a quien, por cierto, mi propio cuñado había pedido que me admitiera en la embajada antes de mi destino a Londres, porque al embajador no le gustaba acoger a desconocidos sin «referencias», por usar la palabra que entonces se aplicaba a empleados y —sobre todo— a servidores domésticos. Y no creo que aquel sistema funcionase peor que el, sin duda más objetivo, introducido luego para los nombramientos por el democrático «bombo».

El embajador, muy atento a las novedades madrileñas, agradeció mi información y mi petición de consejo, y me llevó a almorzar a su club. Pude ver que él estaba perfectamente insertado en la minoría rectora de aquel país, donde los clubes son algo así como las vértebras que articulan el sistema o, al menos, lo eran. En aquel selecto ámbito, me

dió una clara respuesta: debía aceptar, sin duda, porque podría contribuir a mejorar «las cosas» (no detalló cuáles) y porque no podía negarme al nuevo ministro, nuestro amigo, y mi pariente. Además, porque, según me dijo, «hay que aprovechar todas las ocasiones de subir». Le agradecí mucho su invitación y su franqueza.

Años más tarde, tuve ocasión de corresponder a su atención cuando Elisa y yo acogimos a los marqueses en el palacio Montorio, en Roma, siendo ella una eficaz presidenta de la Cruz Roja española que visitaba a su colega, la señora viuda de De Gasperi, nada menos. El embajador nos dejó pronto, y cuando escribo ha fallecido la marquesa, a los noventa y cuatro años. Quede aquí un recuerdo muy afectuoso para ambos.

Mi cuñado y su mujer nos facilitaron generosamente el aterrizaje, al cedernos, por sólo el precio en que años antes lo habían comprado y con pago en cómodos plazos, un buen piso de su propiedad. Llegué a Madrid con el tiempo justo para incorporarme a la nueva tarea, tan interesante como absorbente.

Veinte años después, en 1982, uno de mis colaboradores más próximos que era técnico de Información y Turismo del Estado, Joaquín de Entrambasaguas, me escribió una cariñosa carta sobre aquel período. Me decía que, al despedirme en 1969, tuvo «el consuelo de que no ibas a seguir, por el momento, agotándote en un trabajo excesivo e ingrato» y añadía que yo era, «en grado máximo, el funcionario honesto y responsable». No sé si fue así, en todo caso, mi trabajo hizo recaer sobre Elisa una cuota desproporcionada de la atención que requerían nuestros siete hijos. Nunca ellos y yo se lo agradeceremos bastante.

Antes de ir al ministerio pasé por la casa familiar; y mi padre no me reconoció. Murió esa misma noche, próximo a cumplir ochenta años; y los nuevos mandos del MIT tomamos posesión al mediodía siguiente, en el gran vestíbulo del moderno edificio donde iba, casi, a vivir durante más de siete años, al final de la que era avenida del Generalísimo y es hoy una parte del hermoso paseo de la Castellana.

Había en aquella ceremonia una gran muchedumbre político-social-empresarial-informativa, ávida de novedades. En lo que me concernió, las palabras del ministro aludieron al dolor familiar por mi padre, que sería enterrado horas más tarde, al sacrificio que yo hacía al abandonar Londres, donde mis hijos «habrían aprendido un excelente inglés» y al hecho de que nuestro parentesco —que quiso anunciar antes de que provocara comentarios— no era la causa de mi nombramiento; que se

había producido, dijo, «no por ser mi cuñado sino a pesar de serlo». Tengo esas palabras por una muy honrosa condecoración.

Con su ingenio y suavidad habituales, le contestó el nuevo subsecretario de Información y Turismo, aquel gran talento galaico que fue Pío Cabanillas Gallas, quien luego sería mi querido y admirado amigo. Con su muy gallega y, a veces, impenetrable sorna, mencionó unos corderitos que, al parecer, debíamos llevar en nuestros brazos, por razones que todavía no he descifrado. Con él nos incorporamos los otros nuevos mandos: Antonio García y Rodríguez-Acosta, Juan de Arespachoga y León Herrera para el área del Turismo; Manuel Jiménez Quílez, José María García Escudero, Roque Pro (que permanecía), Gabriel Cañadas y yo mismo, para la de Información. Los dos últimos nombrados serían relevados más tarde por Jesús Aparicio Bernal Sánchez y por Joaquín Juste Cestino. Y Juan y José María pasaron después a otros puestos, en virtud de la etapa de austeridad luego mencionada.

Con el propio Fraga, somos Jesús Aparicio y yo los que todavía podemos contarlo. Con frase lacónica y lapidaria, el nuevo ministro anunció a sus directores generales la compensación por un trabajo que no sería escaso: «Cuarenta mil pesetas y coche.» El coche era el del Parque Móvil de los Ministerios Civiles, el célebre PMM, sigla que la chunga popular tradujo en «Para Mi Mujer» lo que era inexacto porque las cónyuges no podían ir solas a bordo sin riesgo de denuncia. No olvidemos que era un tiempo machista, sin ministras, subsecretarias o directoras generales.

Mi cuñado supo siempre mantener ese equipo cohesionado, sin peleas internas. A él se sumaron el jefe de su secretaría, Luis González Seara, y Gabriel Elorriaga, que se encargó de dirigir un útil invento, el Gabinete de Enlace, orientado hacia el resto de la Administración y del poder. Salustiano del Campo se encargó del nuevo Instituto de la Opinión Pública. A mí, en síntesis, me tocó ser un «administrador de la cultura»; o así me definí casi ocho años después, terminada ya aquella larga e intensa etapa, en una conferencia que pronuncié en 1970 en Palma de Mallorca, donde me habían invitado a presidir el jurado de un premio nacional de cuentos que llevaba el nombre ilustre de Ramon Llull. La invitación testimonió el recuerdo de dos buenos amigos, Florencio Arnán y Juan Sierra, creadores entusiastas de la Asociación Española del Teatro Infantil y Juvenil.

Empecé allí diciendo que, entre las múltiples definiciones de la cultura, yo prefería la de Ortega y Gasset, para quien es «el sistema vital

de las ideas de cada tiempo». Y me permití glosar la definición diciendo que «vital» quiere decir «que no es siempre sistemático, porque la vida no lo es»; y que la palabra «ideas» engloba algo más, como las creencias que el propio Ortega había explicado y como las manifestaciones sensitivas que, a menudo, tienen que ver con el subconsciente y la creación; es decir, con un mundo que «no llega a formularse en conceptos, que no puede quizá considerarse idea en el sentido estricto del vocablo».

Y mi reflexión sobre esa delicada área de trabajo me llevó a recordar unas frases de Unamuno para quien «junto a los factores positivos de toda civilización, de toda comunidad cultural, también existen los factores negativos» a los que él no dudaba en llamar «los detritus de la vida cultural y de la civilización», que no son en verdad menores. Cité un libro que entonces llamaba mucho la atención, *El retorno de los brujos* de Bergier y Pauwels, publicado en 1960, que presentaba como contemporáneos nuestros a la inmensa mayoría de los sabios que el mundo había generado en toda su historia, mientras, asistíamos a la creciente industrialización de la cultura en el marco de una sociedad de consumo. Y me preguntaba por la actitud que debía de adoptar quien tuviera responsabilidades culturales, entre las tres posibles de las que la primera era la totalitaria, en la que sólo el Estado, y nadie más, genera los hechos culturales que le convienen.

Durante una visita a la Unión Soviética, un intérprete me explicó en Moscú que los lectores rusos no podían conocer algunas obras de Jean-Paul Sartre, fervoroso entusiasta de su ideología y su régimen, porque no eran suficientemente ortodoxas. A continuación, dije con la claridad necesaria que yo no defendía la posición contraria, la liberal pura. El franquismo no era un régimen liberal, como creo que tampoco lo habría sido, sino todo lo contrario, el que hubieran establecido en su caso las fuerzas derrotadas en la guerra civil. Pero, en el lapso de mi gestión y con el pleno respaldo de Fraga, se habían dado pasos serios para dar mayor libertad a la vida cultural en todas sus dimensiones, desde la edición hasta los espectáculos, desde la prensa diaria hasta los ateneos.

Resumí allí mi charla con el jefe del Estado cuando, como era costumbre entonces, fui a despedirme al cesar en la dirección general, y le expliqué que las dificultades surgidas en mi labor se debían a la ausencia de uniformidad, es decir, a que cada libro, película, obra de teatro o festival, era una realidad distinta y no cabía verlos como productos en serie, sino que exigían un estudio específico por separado. Franco me escuchó con atención, agradeció mi trabajo y me dijo: «Por supuesto,

Robles, eso no son ciencias exactas.» Sin duda, no lo son; y añadiré que así es, por fortuna.

La etapa allí comentada fue una de las más largas y más intensas de mi vida. Durante más de siete años, fui director general en aquel ministerio, primero de Información y luego, durante los dos últimos y pico, de Cultura Popular y Espectáculos. A estos cargos, con gobiernos donde predominaba la *seniority*, solían ir entonces personas de «cierta edad», como solía decirse. A mis treinta y cinco años, fui durante algunos meses el director general más joven del gobierno. Dejé de serlo cuando alguien muy notable, Juan Miguel Villar Mir, fue nombrado director general en el Ministerio de Trabajo, con sólo treinta años de edad, precocidad bien merecida y, entonces, apenas imaginable. En aquella España centralizada, un director general tenía bastante poder, sobre todo si su ministro se había hecho un hueco notable en el gobierno. Como supieron pronto nuestros funcionarios, eso es lo que ocurrió; y su propio peso relativo creció en las múltiples reuniones interministeriales a las que debían concurrir.

Todo ello aconseja recordar otro rasgo esencial de aquel ambiente. Por una parte, la mayoría de los españoles había aceptado el franquismo sin protestas, no sólo porque estuvieran prohibidas, sino porque el paso del tiempo suavizó las brutales tensiones —y las graves represiones— de la guerra y posguerra; y, además, porque el ambiente áspero de los cuarenta había mejorado y entrábamos en la era del Seiscientos y de las vacaciones, con una sociedad que recibía, por ejemplo, una protección sanitaria de la que sus padres habían carecido. Eso era compatible con que las «minorías ilustradas» exigieran más libertad. Era la época de las cartas de los intelectuales y los artistas que escribían usualmente a Fraga, como lo habían hecho ya cuando era sólo director del Instituto de Estudios Políticos a comienzos de 1962.

Este episodio (y los cruces de cartas posteriores, porque Fraga siempre las contestó) fue explicado en un libro de Pere Ysàs (*Disidencia y subversión. La lucha del régimen franquista por su supervivencia, 1960-1975*, Crítica Contrastes, Barcelona, 2004), que recoge alguna propuesta mía orientada a la captación de voluntades y a evitar que la Dirección General de Seguridad actuara en el mundo cultural sin nuestro conocimiento. Ese sector, minoritario pero muy selecto de nuestra sociedad, era el que a nosotros nos ocupaba.

En los primeros cinco años, mi trabajo se apoyó en sendas subdirecciones generales; la de Difusión y la de Cultura Popular, así como en una secretaría general. Encomendé aquéllas a dos amigos que conocía

bien de mis años colombianos. Una a Joaquín Benítez Lumbreras, la otra a Enrique de la Hoz Díaz. Por un curioso azar, tenían algo más en común: eran conquenses. A Joaquín le tocó, esencialmente, seguir de cerca el mundo del libro, tanto en orden a la actitud del Estado ante sus contenidos —dicho claramente, la censura de libros— como en lo concerniente a su promoción, así como el de la información hacia el exterior. A Enrique, el de la organización de manifestaciones culturales, que fueron, sobre todo, los Festivales de España y otras semejantes, como los Carros de la Alegría o la relación con el asociacionismo cultural, que se expresaba, por ejemplo, a través de los ateneos a los que, en aquellos años, reunimos en dos congresos nacionales celebrados en Santander, como se ha dicho, y en San Sebastián.

Enrique fue el verdadero e imaginativo creador de «Paz en la Tierra», deliciosa campaña de Navidad que montamos con ayuda de las muy activas Asociaciones de Belenistas. Por ejemplo: en esas pascuas de 1968 y 69 celebramos en casi toda España 569 actos navideños, incluida la ayuda técnica y económica para instalar grandes belenes al aire libre.

Recuerdo cuando Enrique y yo fuimos a proponer al ministro la creación de una orquesta sinfónica y coro como alternativa a la Orquesta Nacional del Ministerio de Educación Nacional. Fraga, buen melómano, aceptó en seguida la idea y vio en RTVE al organismo que podría pagarla y constituir su principal «cliente». Así ocurrió, pero la nueva orquesta fue también una valiosa protagonista en los festivales. Tuviémos, además, la fortuna de contratar un primer director realmente extraordinario, el ruso exilado Igor Markievitch, a quien solíamos llamar el príncipe Igor, porque lo parecía. Un concurso oposición muy riguroso nos permitió seleccionar dos espléndidos directores adjuntos, Enrique García Asensio y Antoni Ros Marbà.

La orquesta nació y se consolidó con merecidos triunfos y estimuló a los maestros de la nacional (cuyos sueldos hubieron de ser mejorados).

Con Elisa —mi melómana de cabecera— he tenido el gusto de asistir al concierto conmemorativo de su vigésimo quinto aniversario.

Hablando de música, recordaré siempre un almuerzo que Fraga, a comienzos de 1963, ofreció al entonces presidente de la Sociedad General de Autores de España, el dramaturgo Joaquín Calvo-Sotelo, a quien acompañaba su vicepresidente, el compositor Federico Moreno Torroba. Les disgustaba, con razón, el hecho de que Televisión Española y Radio Nacional de España utilizaran el repertorio musical y teatral de los autores españoles, que nunca recibían por ello la menor remunera-

ción. Fraga ofreció, y ellos aceptaron, una compensación global y anual que, después de las lógicas discusiones, quedó fijada en un millón de pesetas, que no era poco en aquella época, debiendo distribuir las luego entre los autores. Fue firmado un convenio por Calvo-Sotelo y por Roque Pro, y el sistema, con correcciones en la cifra, funcionó durante algunos años.

Para secretario general elegí a un veterano funcionario de la casa, que era, además, sobrino segundo mío, aunque algo mayor que yo, Enrique González-Estéfani Robles. Tuve un jefe de secretaría, Rafael Motto Ayora, que vino de Nador, donde había sido conmigo canciller en el consulado. Ninguno de ellos está ya en este mundo. Y, por fin, me tocó la fortuna de encontrar en la secretaría a mi muy querida Paquita Navarro, que vivía allí una vida plácida porque mi predecesor llevaba un ritmo relativamente calmoso. Era yo buen amigo de su hermano Jaime, ilustre ingeniero de Minas que dirigía las de hierro del Rif, en el territorio de mi antigua demarcación consular, donde —como en las de Setolázar— se produjo una huelga de los obreros marroquíes por motivos salariales. Paquita me contó, años más tarde, que estaba veraneando en casa de su hermano cuando oyeron por la radio, algo confusamente, el nombre de su nuevo jefe, es decir el mío. Y Jaime le dijo: «Pues si es el que yo he entendido, se te ha acabado eso de hacer punto en la oficina.» Se le acabó.

Volvamos al viejo MIT. La dirección general fue reorganizada mediante un decreto, de 11 de octubre de 1962, que creó las dos grandes áreas citadas. La primera me dio, como era lógico, más quebraderos de cabeza que la segunda, y ocupó, por tanto, mayor cuota de mi tiempo. La verdad es que la acción propagandística de un gobierno internacionalmente asediado era tan necesaria como escasa, y hubimos de empezar casi desde cero.

Buena muestra de ello creo que la dio el boletín *ES, España Semanal*, que creamos inmediatamente. Impreso en papel biblia, bicolor y de tamaño cuartilla, resumía la vida nacional en ocho páginas y cuatro ediciones semanales en español, inglés, francés y alemán, más una mensual en árabe. Dirigido por Benítez, tuvimos la fortuna de hallar al redactor-jefe perfecto, que lo llevaba día a día, línea a línea: Francisco Narbona González, excelente periodista y hombre leal —cuyo apellido sería más conocido años después a través de su hija, Cristina Narbona, ministra en un gobierno socialista—. Desde que *ES* vio la luz, en octubre del 62, hasta diciembre del 63, imprimimos y enviamos por correo aéreo casi

dos millones y medio de ejemplares. Entre 1966 y 1967, la tirada total se acercó a los trece millones y medio; y fue de casi veinte millones en los veintidós meses comprendidos entre enero del 68 y octubre del 69, cuando dejamos el ministerio. Se comprende que no eran pequeños el esfuerzo y el gasto que esta distribución requería.

Era inevitable que bastantes libros, cuyo número fue aumentando a medida que la sociedad demandaba más libertades y los editores se confiaban, hubieran de llegar a mi mesa y requerir una lectura personal, que podía conducir a soluciones amistosas, a veces dialogadas con el autor, el editor o ambos; a veces adversas y, en estos casos, posiblemente erróneas. Más de una vez hube de dedicar a esas lecturas, no siempre amenas, ese tiempo del fin de semana que estaba teóricamente reservado a la familia.

Era obligado partir de la realidad: la censura tenía hábitos arraigados que costaba cambiar. Quizá lo revela bien lo ocurrido con un conocido libro de Camilo José Cela, sus llamativas *Izas, rabizas y colipoterras*, como él denominaba allí a las servidoras de la que se tiene por la más vieja profesión del planeta. Fue autorizado bajo mi mandato, en 1963, con la conformidad de un censor religioso de alto nivel intelectual, el padre Saturnino Álvarez Turienzo, de la Orden de San Agustín, a quien quedó confiada su lectura por motivos morales. Este muy culto sacerdote, notable filósofo, dijo en su informe que el libro es «una obra que no entiende, en caso de que tenga algo que entender, así como tampoco entiende que una pluma como la de Cela se ponga al servicio de él». Pero dio el visto bueno, salvo una fotografía. Yo mismo escribí a Camilo, que era buen amigo, el 11 de julio del 63, ratificando el criterio del censor y sugiriendo, incluso, un cambio de portada. Él contestó en seguida agradeciendo nuestra opinión y añadiendo que, si era un clérigo el censor como suponía, su «contento es aún mayor» dado que él nunca había creído, «con el padrecito Baroja, que la culpa de todos los males españoles la tenían siempre los curas y los consumidores —no soy tan ingenuo como para eso». Mantenía algún desacuerdo sobre ciertos rótulos que al censor parecían «incitadores a abusos en el terreno sexual» y que él más bien entendía como «alejadores de todo apetito erótico». La correspondencia siguió y, el 15 de julio del mismo año, en papel de la Real Academia Española, Camilo José Cela me agradecía «tu respeto al texto que, te lo digo muy de veras y con una mano en el corazón, no hubiera resistido suerte alguna de poda». Todavía la portada causó alguna discrepancia, pero se llegó a un final feliz porque el libro salió como él quería.

Meses después, el 13 de febrero de 1964, le anunciaba que «en ese sistema [el censoral] se van a introducir modificaciones importantes como consecuencia de la Ley de Prensa e Imprenta» que nosotros considerábamos «un paso muy importante que, por serlo, no ha podido darse con mayor rapidez».

Y éste es un buen momento para recordar que aquella ley no fue sólo «de Prensa» como suele parecer. Al anteproyecto inicial hubo que añadir la vertiente «de Imprenta» en la que, por supuesto, trabajé con mi gente y que significó un notable cambio respecto al libro, puesto que suprimió la censura previa y la substituyó por una posible consulta de la que muchos autores y editores fueron poco a poco prescindiendo. Un historiador al que, como ya vimos, no tengo por profranquista, Paul Preston, dice de Fraga que «su liberalización parcial de la prensa lo convertiría en uno de los que cavaron la fosa al régimen» (*Franco «Caudillo de España»*, Grijalbo, Barcelona, 1994). Exageradilla, como casi todo lo de este autor, ahí queda su afirmación...

El libro de Cela volvió a mi mesa cuando, en 1996, una nueva edición se presentó acompañada por dibujos del gran ilustrador que fue Eduardo Vicente. Hube de intervenir contra la decisión inicial de suprimir cuatro de ellos que exhibían pechos femeninos y que fueron, por supuesto, autorizados. La verdad es que, en el caso de Cela, todo era más fácil, porque la amistad era sólida y estuvo viva hasta su muerte, en enero de 2002. (En mi etapa en RTVE, estaríamos más tarde Manolo Calvo y yo acompañándole en el rodaje de *La colmena*, que coproducía nuestro Ente Público. Y, en un almuerzo en casa, dimos entonces los primeros pasos, que no hubo tiempo de consolidar, para un programa televisivo que habría aunado la excepcional pluma de Camilo con los conocimientos marineros de su hijo, el profesor Camilo José Cela Conde, hoy segundo marqués de Iria Flavia y experto navegante. Le acompañé, por supuesto, cuando acababa de fallecer en Madrid, en enero de 2002.)

Por otra parte, respetando como era natural su separación y su segundo matrimonio con Marina Castaño, que hoy custodia bien su obra en Iria Flavia, guardamos siempre un muy afectuoso recuerdo hacia su primera mujer, Rosario Conde; ambos nos habían atendido con cariño y paciencia en su hogar mallorquín cuando un inoportuno avión había demorado, años antes, nuestro regreso a Madrid, y nos dedicaron un tiempo detraído de cualquier otra actividad, quizá más grata.

Quizá, tampoco era el león tan fiero como lo pintan. Por ejemplo, el gran poeta y estalinista convencido Rafael Alberti, de quien luego se

hablará, publicó en España, en mis siete años en la dirección general, dos de sus libros importantes, *Abierto a todas horas* (Afrodisio Aguado, 1966) y *Poemas de amor* (Alfaguara, 1966), así como sus *Obras* (poéticas) completas, también con A. Aguado, en 1968.

En otras ocasiones, después de leerme el respectivo libro y los informes emitidos sobre él, resolví el problema mediante un almuerzo muy sencillo con el autor y, a veces, con el editor, en el Club Internacional de Prensa (que Fraga había creado e inaugurado a poco de llegar al ministerio, en la calle Pinar, número 5, de Madrid), donde hablábamos con tranquilidad.

Así, tuve uno con el matrimonio formado por Ricardo Fernández de la Reguera y Susana March, autores de los *Episodios Nacionales Contemporáneos*, acerca de su libro dedicado a *El desastre de Annual*, editado por Planeta, que, por supuesto, había sido escrutado con mucha atención por nuestros lectores, porque refleja con gran crudeza uno de los capítulos más dolorosos y menos honrosos de las campañas dirigidas por nuestros militares profesionales y destinadas a establecer el Protectorado sobre el norte de Marruecos y, antes, a consolidar nuestras dos ciudades africanas, Ceuta y Melilla, entonces llamadas plazas de soberanía.

No podíamos olvidar que eran acciones militares en las que había participado el autor del *Diario de una bandera*, un tal Francisco Franco. Yo lo olvidaba menos que otros porque, desde mi reciente etapa como cónsul en Nador, conocí aquellos escenarios y porque conservo un ejemplar de ese *Diario* afectuosamente dedicado por su autor. Hábilmente, el libro que relata tan amarga derrota está encabezado por una cita de este libro, donde se reconoce «lo espantoso del desastre».

Los autores tuvieron el talento de apoyar su texto en testimonios irrefutables, que incluyen citas de Mola, Romanones, Gabriel Maura y Eduardo Aunós. El *Annual* que me enviaron, dedicado, testimonia la amable gratitud de ambos por aquel encuentro y por su resultado.

Recuerdo asimismo el que allí tuve, mano a mano, con Juan Marsé, cuyas *Últimas tardes con Teresa* ofrecen un panorama nada rosáceo de la Barcelona de la posguerra. Años después, ya en plena democracia, el periodista Luis Bonet Mojica publicó en *La Vanguardia* (21-III-1984) un amplio artículo dedicado a la versión cinematográfica de la novela, donde escribe que «releyendo la novela todavía sorprende cómo diversos pasajes de la misma pudieran pasar la censura de la época». Marsé cuenta que se entrevistó conmigo en aquel almuerzo, una vez que la censura la prohibió y que yo le hice «más bien una corrección de

estilo» en «cosas de orden erótico más que político». Añade algo que no recuerdo: que me molestaba que utilizase la palabra «muslos» y que le sugerí que la substituyera por «antepierna». No era mal invento lexicográfico. Entonces vio que se podía publicar.

Me vienen a la memoria otras conversaciones con el gran Cela —que tenía varias experiencias con la censura— sobre otros libros suyos, en particular el dedicado exactamente al día inicial del alzamiento, por lo que lleva el nombre del santo del día: *San Camilo, 1936*. Éste fue uno de los libros esgrimidos en la lucha interna que llevó a la crisis de 1969 y a la salida de Fraga del gobierno. Y mi ejemplar me fue afectuosamente dedicado por Camilo.

Me parece interesante relatar con toda claridad cómo fueron mis relaciones con tres grandes escritores hispanoamericanos ya entonces vinculados, en grado diverso, con la vida española.

La primera tuvo como protagonista a un gran y, entonces, joven novelista al que, en el momento de cerrar estas líneas, han concedido por fin el Premio Nobel que mucho ha merecido durante largos años, evitándome la lamentación que dejé escrita en las primeras versiones de estas páginas. Estoy refiriéndome a Mario Vargas Llosa, peruano y español, tanto real como legalmente. Con él y con su editor y amigo, Carlos Barral, me reuní para almorzar en el club. Teníamos que examinar algunas dificultades que mis lectores-censores habían detectado en la gran novela que es *La ciudad y los perros*, cuyo evidente tono antimilitarista nos inquietaba, en un sistema político como el nuestro, nacido de un choque armado y regido por el Generalísimo. Quizá por mis antecedentes familiares, yo tenía especial sensibilidad en este terreno. Lo pasé muy bien con tan espléndido relato cuyo original me había leído de un tirón en un fin de semana, y anoté algunos posible retoques, casi todos en el léxico que, en general, fueron aceptados a lo largo del coloquio, lo que permitió la feliz edición de un libro sobre cuya valía me había, además, advertido un amigo a quien yo quería y respetaba, mi compañero de facultad José María Valverde, catedrático de Estética en la Universidad de Barcelona y que había presidido la SUACI citada en otra parte, como ya dije.

No era difícil advertir la alta calidad del relato de aquel joven novelista, que, en buena parte, parecía resultar de su —mala— experiencia personal en un colegio militar limeño. Al leer las primeras declaraciones del nuevo premio Nobel me ha impresionado, naturalmente, su afectuoso recuerdo de Barral como su descubridor. Ya que ha sido men-

cionado: con Carlos Barral tuve siempre una relación difícil, porque él, miembro de una familia de la burguesía barcelonesa e incorporado de joven a grupos tan afines a mí como el Instituto de Estudios Hispánicos de Barcelona, era un intelectual que fue evolucionando, desde la conformidad hasta la más firme oposición a aquel régimen; de lo que quedan huellas en sus dos memorias de juventud (*Años de penitencia y Los años sin excusa*, Alianza Editorial, Madrid, 1975 y 1977), que se cierran en los días en que iban a cesar en el MIT nuestros predecesores. Un par de años después de aquel almuerzo a tres, se metió —y nos metió— en un buen lío, porque su amigo el editor italiano Giulio Einaudi publicó unos supuestos *Cantos de la resistencia española* que eran, en realidad, agravios e insultos contra España y algunas de sus personalidades, escritos desde una plebeyez rechazable por todo ciudadano de mínima sensibilidad, cualesquiera que fuesen sus ideas. Einaudi fue declarado persona non grata, y no se autorizó la reunión que se celebraba en Formentor, Mallorca, para otorgar el premio literario que llevaba el nombre de ese lugar. Recogiendo el título de un artículo aparecido en el semanario italiano *Lo Specchio*, publicamos un folleto sobre el asunto titulado *La Marsellesa de los borrachos*. Lo más significativo, sin embargo, fue que los tribunales de la democracia italiana ordenaron el secuestro de los ejemplares e iniciaron un proceso contra el editor y los tres autores del libro.

Todavía más tarde, tuve dos ocasiones de encontrar a Barral: en la primera, su amigo de juventud Alberto Oliart, que había sido ministro con Adolfo Suárez y con Calvo-Sotelo, me invitó a almorzar en mi etapa en RTVE. Lo que quería era que yo mantuviera un pequeño puesto que Barral, comensal con nosotros, tenía en el Ente Público como supuesto asesor en temas catalanes. Se lo mantuve, por supuesto, aunque nunca me llegó en aquellos meses ni una sola nota de mi «asesor». Fue una historieta que tuve en la punta de la lengua, donde se quedó, cuando más adelante mi tocayo y yo tuvimos nuestro último encuentro: éramos los dos senadores, él por el PSOE, y celebramos en la sala de plenos un «cambio de impresiones» sobre algo de escasa cuantía.

El segundo problema, en este caso puramente burocrático, lo planteó el gran libro de Gabriel García Márquez, otro muy justo Nobel de nuestra lengua. Sus ahora celeberrimos *Cien años de soledad* habían sido publicados en Buenos Aires por Editorial Sudamericana, creada por su propietario, Antonio López Llausás, exilado catalán de nuestra guerra. Cierta día, nuestros servicios fueron informados de que esa novela, cuyo éxito crecía sin publicidad por el entusiasmo de los lectores,

estaba en las librerías españolas, pese a que no había solicitado el preceptivo permiso de importación. Tengo todavía, firmado por mí en aquel año de 1968, el ejemplar de la séptima edición argentina que me pasaron los servicios de control. En un viaje a Barcelona, donde Gabo entonces residía, le invité a almorzar, en compañía del citado jefe de este servicio, Faustino G. Sánchez-Marín, de quien en seguida hablo.

La noche anterior, en el hotel barcelonés, me leí buena parte del volumen, que me fascinó, como a todos sus millones de seguidores en muchas lenguas. Fue una charla muy grata porque no teníamos nada que objetar al libro, con lo que hablamos bastante de Colombia, de la que mis recuerdos eran recientes y vivos.

Las obras de García Márquez jamás nos plantearon problemas. La suya es una pluma de tal calidad que tampoco él necesita recurrir a excesos ideológicos o eróticos. Se le explicó el sencillo trámite burocrático a seguir, su editor lo cumplió y el episodio quedó cerrado. Alguna vez, hace bastantes años, comprobé que Gabo recordaba aquel almuerzo, que seguramente ha olvidado ya, en la euforia de su ingreso en el exclusivo grupo de los octogenarios, muy gloriosamente celebrado en Cartagena de Indias.

Releo en estos días con gran gusto aquel texto, aunque mi preferido, entre los suyos, sea *El amor en los tiempos del cólera*.

Un año después, Edhasa pidió nuestra venia para editar en España cinco mil ejemplares con autorización de Sudamericana y así lo hizo, naturalmente. Tiene alguna gracia la argumentación usada por el editor español en su solicitud: los libros llegan con retraso desde Buenos Aires; es bueno agilizar el intercambio cultural con una nación hermana, y conviene incrementar «el rendimiento laboral de nuestras imprentas». Para el lector de mi dirección general, que preceptivamente informó sobre un texto ya en circulación, éste ofrecía «una idea lo más exacta posible de la baja y media sociedad hispanoamericana» y, al hacerlo, «no defiende tesis sino que describe situaciones». Como siempre se les pedía una valoración literaria, la de aquel censor quedó así resumida: «Como novela, muy buena.»

Por supuesto, cometí muchos errores; o que quizá lo sean, vistos desde ahora. Por ejemplo, me gané para siempre el odio —muchas veces expresado— de Carlos Fuentes, el sin duda excelente autor mexicano, tercero de los escritores hispanoamericanos a que me refiero. Su novela *Cambio de piel* no fue acogida favorablemente en el año 1967, aunque sin producirse una decisión oficial, porque los presuntos edito-

res —Seix Barral, de Barcelona otra vez— nunca la presentaron a la consulta previa establecida por la Ley de Prensa e Imprenta de aquel mismo año, ni quisieron correr el riesgo de editarla. La actitud de rechazo no fue causada por ningún motivo ideológico o político, sino exclusivamente por sus descripciones pornográficas y blasfemas que la legislación de aquel régimen no aceptaba, sin que pareciera razonable conceder más licencias a los forasteros que a los autores españoles. Aquel conflicto motivó una amplia correspondencia mía, a la que en verdad yo no estaba obligado, con el editor Carlos Barral y con el propio autor, pero el acuerdo no fue posible. Fuentes, con datos que yo había antes facilitado a Barral, me escribió en mayo y julio del 67 pidiendo cortésmente explicaciones. Un viaje mío a Iberoamérica retrasó levemente mi respuesta, que le di en una larga carta (tres páginas a un espacio) el 31 de julio. Le expresaba mi deseo de llegar a una solución pactada como había ocurrido en otros casos y, como lector de su libro, alababa «su mérito literario y la extraordinaria calidad de su prosa» que —le decía— alguien acababa de comparar con las de Cervantes, Balzac y Faulkner, nada menos... Le recordé que circulaban por España sin dificultad otras cinco obras suyas, las tituladas *La región más transparente*, *Las buenas conciencias*, *Cantar de ciegos*, *La muerte de Artemio Cruz* y *Zona sagrada*. Las dos primeras habían sido prohibidas en 1960 y fueron autorizadas en la revisión que ordené al llegar a la dirección general en 1962. El señor Fuentes trasladó sus puntos de vista a su país; y el semanario mexicano *Siempre!* publicó, el 4 de septiembre del 67, una amplia y escandalosa información en la que el novelista nos insultaba a placer, a mí especialmente. (Es un insultador habitual e iracundo: por ejemplo, en un artículo en *El País* [18-IV-07], lo ha hecho sin motivo aparente contra José María Aznar, dándome así honrosa compañía.) Hablaba de «nueva quema de libros» y sostenía que «los modernos inquisidores españoles son peores que los viejos inquisidores» y que «en los procesos seguidos por el Santo Oficio no se puede encontrar una censura tan impúdica, tan sucia, tan irracional y tan anticristiana».

El 9 de octubre del 67 contesté al fundador y director del semanario, señor José Pagés Llergó, con una extensa carta abierta. Uno de mis párrafos explicaba que las leyes españolas y nuestras normas escritas en materia de moral y de costumbres, a las que nos ateníamos, eran muy parecidas a las mexicanas allí vigentes, de las que citaba las siguientes: la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, artículos 6 y 7; la Ley mexicana de Imprenta, artículo 20; el Código Penal para el Distrito

Federal y territorios federales de México, artículo 200; el Reglamento de la Asociación mexicana de la Industria editorial, artículos 6 y 7; y el Reglamento sobre Publicaciones y Revistas ilustradas de 1951. El semanario publicó íntegra mi carta y no siguió con la polémica.

Más adelante me visitó el propio Pagés Llergó a quien recordé esas leyes y normas. Reconoció su existencia y su gran similitud con las españolas; ocurría sólo —según me dijo— que en México... no se cumplían. Le hice saber que nosotros sí cumplíamos las nuestras. El libro, por supuesto, había sido estudiado a fondo por los censores que reconocían su valor literario, ganador como era del Premio Biblioteca Breve. Lo leí yo mismo y pedí un nuevo examen a los más calificados entre esos expertos; y, con los informes antes emitidos, se conserva el redactado por uno de ellos que era persona de singular preparación literaria y de criterio nada pazguato. Su texto usa expresiones como «erotismo feroz», «pornografía delirante», «procacidad», «aberración sexual» y «abundancia de blasfemias». A la vista de mi interés en este libro, ese lector recogió en cuarenta y ocho folios (*sic*) nada menos que ciento noventa «pasajes censurables» que, además, comparó con la versión inglesa que, entre tanto, había sido editada con no pocos párrafos suprimidos, abreviados o suavizados. Fuentes nunca me lo perdonó. No es inútil añadir que estaba ya vigente la Ley de Prensa e Imprenta, que había substituido la censura previa por una consulta voluntaria para conocer el criterio de la Administración. El libro podía ser editado contra este criterio y, en tal caso, podía ser retenido y almacenado a petición nuestra en espera de una posterior decisión judicial que, en varias ocasiones, dio la razón al editor y no al poder ejecutivo. Seix Barral no siguió este camino, sino que editó el libro en México y Argentina. Quien desee más información sobre este incidente puede encontrarla en el número 387, enero de 1968, de *La Estafeta Literaria*, la revista de la que en estas páginas algo se dice.

La novela en cuestión fue autorizada en 1974 por quien creo que fue el último director general de Cultura Popular. Mucho había cambiado el ambiente —no las leyes— en los casi siete años que separan ambas fechas. En ese tardío momento, otro censor de la dirección general había pedido, sin embargo, que se suprimieran algunas frases o párrafos en páginas que él citaba porque contenían «alguna blasfemia soez», «irreverencias» o «grosera pornografía». No le hicieron ningún caso.

Recuerdo algún otro ejemplo que me afectó especialmente, porque el libro bien merecía la pena: hablo del gran *Tambor de hojalata*, de

Gunther Grass, sobre el que mis censores emitieron una opinión negativa, aun subrayando el alto valor literario que yo les había pedido que mencionaran siempre en sus informes, sobre todo si eran adversos. Lo leí y me pareció lamentable no publicarlo. Consulté el tema con el ministro, que alguna vez tomó la decisión última, sobre todo en libros de pensamiento, leyendo él mismo el texto en cuestión; dado que lo que estaba en juego en este caso eran valores morales, prefirió someterlo a un obispo de su confianza que emitió dictamen negativo, por el planteamiento que el gran autor alemán hacía en aquel terreno. Siempre me ha dolido aquella decisión.

Otro de los —pocos— libros que consulté con Fraga fue uno de don José María Gil Robles, el ex jefe de la CEDA, que, como es bien sabido, vivía en Portugal. Yo deseaba autorizarlo en su integridad, pero tenía que llamar su atención sobre algunos párrafos. El ministro los leyó y me devolvió en seguida el ejemplar. Su dictamen fue claro: «Lo importante de este libro, sobre todo por quién lo escribe, es el título.» Se llamaba, y se llama, *No fue posible la paz*.

Puesto que he mencionado las ideologías, deseo recordar cómo «abrimos la mano» al pensamiento marxista, por ejemplo tal como se expresa en la llamada Escuela de Frankfurt y en las obras de Georg Lukács, que Grijalbo y algún otro editor sacaron a la luz después de muchos años de silencio; o de Louis Althusser, aquel extraño doctrinario marxista *piéd noir* que fue católico, luego —y sobre todo— comunista, vivió en hospitales psiquiátricos y estranguló a su mujer. No se publicó nada suyo en España hasta 1968 y, al año siguiente, fue autorizado en catalán. No compartíamos ni de lejos esa doctrina, pero reconocíamos a los españoles madurez bastante para conocerla, si así lo deseaban. No me sorprendió, por ello, que la llegada de ese pensamiento a las librerías fuera una las acusaciones más eficaces lanzadas contra nuestra gestión en la crisis de 1969.

Sólo recuerdo una vez en que el ministro tomó una decisión en este campo y me la comunicó. Se trató del buen escritor, premio nacional de Literatura y académico de la Lengua, que fue Ramón Pérez de Ayala, quien falleció a los ochenta y dos años, en los días en que llegábamos al Ministerio. Fraga me dijo que serían autorizadas las *Obras completas* de Pérez de Ayala, con la excepción de un libro que él mismo había deseado olvidar: un relato titulado *A. M. D. G.*, que se refería, evidentemente, a la divisa ignaciana utilizada por los padres jesuitas, de cuyo colegio no guardaba el autor muy buen recuerdo.

El lado positivo del trabajo no era sólo el de la apertura desde el ángulo censorial, lo que por cierto se refleja en el citado *Boletín de Orientación Bibliográfica*, sino que se centró en la promoción de la edición y de la lectura. La labor principal, en este sentido, fue la realizada desde el INLE (Instituto Nacional del Libro Español), del que en seguida se hablará. Hubo además otras iniciativas específicas tales como la continuidad de la muy veterana revista *Poesía Española*, que dirigió con acierto José García Nieto y, sobre todo —por cubrir un campo más amplio, con mayor tirada— la renovación muy a fondo de *La Estafeta Literaria*, fundada en 1944 por Juan Aparicio desde la Delegación Nacional de Prensa (del Movimiento) y que había pasado, años antes, a la dirección general que me fue confiada en el 62.

Mi primera idea sobre *La Estafeta* fue la de hacer una revista enteramente nueva, y así lo hablé con el ministro, a quien dije que me gustaría abrir en sus páginas un debate no sólo literario, sino de ideas, por lo que sería deseable un nuevo título que incluyera la idea del diálogo. Me dijo, más o menos, esto: «Lo siento pero se te han adelantado. Acabo de autorizar a Joaquín Ruiz-Giménez la edición de unos *Cuadernos para el Diálogo*.» De modo que volvimos al título existente, tratando de mejorar y «abrir» sus contenidos, además de diferenciarla de aquella *Gaceta Literaria* que Ernesto Giménez Caballero había creado en enero de 1927, y que en sus primeros números contó con tan buenas plumas como las de Pedro Saínz Rodríguez, Ramón Gómez de la Serna, Antonio Espina, Melchor Fernández Almagro, Enrique Lafuente Ferrari, José Bergamín, Antonio Ballesteros y Joaquín de Zugazagoitia. Logramos nosotros textos originales de José Luis Cano, Federico Muelas, Antonio Fernández Cid, Rafael García Serrano, Ricardo Baroja, Dionisio Gamallo Fierros, Juan Antonio de Zunzunegui, José María Sánchez Silva, Eugenio Montes, José Filgueira Valverde, José María Valverde, Víctor Ruiz Iriarte, José García Nieto, Miguel Utrillo, Enrique Larreta, Emilio Carrere, Antonio Valencia, César González Ruano, Tristán La Rosa, José María de Cossío, Adriano del Valle, Antonio Gallego Morell, Alfonso Canales, Angel María Pascual, Pedro Murlane Michelena, Camilo José Cela, Rafael Montesinos, Victoriano Crémer, Rafael Morales, Juan Fastenrath, Jaime Suárez, Vicente Gaos, Dictinio del Castillo-Elejabeitia, Rafael Santos Torroella, Antonio de Zubiaurre y Rafael Duyos, entre otros. No era un mal muestrario, al que conviene añadir ilustradores de la talla de Daniel Vázquez Díaz, Bagaría o Bartolozzi.

En cuanto a los *Cuadernos* de Joaquín y sus amigos, Fraga nos en-

cargó que los siguiéramos y resolviéramos las dudas previas que pudieran ellos tener; y ese trabajo lo hizo bien «mi» Joaquín Benítez Lumberras, que recibió en varias ocasiones a Gregorio Peces-Barba, quien luego sería, con Fraga, uno de los padres constituyentes. Joaquín me consultó alguna vez; y mi recuerdo es el de que todo funcionó con suavidad y cortesía. Es bien sabido que esa revista, y quienes la escribían, tendrían un peso notable en la futura transición. El reciente fallecimiento de Ruiz-Giménez ha reverdecido la memoria de aquellos *Cuadernos*.

Para concebir y lanzar la nueva etapa de *La Estafeta*, tuve la fortuna de encontrar a la persona adecuada, Luis Ponce de León, un médico de oficio y escritor de vocación, con capacidad para agrupar un núcleo de redactores en el que figuraron ensayistas tan notables como Juan Emilio Aragonés como subdirector y Antonio Iglesias Laguna como redactor jefe. Luego se sumaron a tan pequeño equipo Eladio Cabañero y Juby F. Bustamante. Asentada su redacción en el Ateneo madrileño, estaba en contacto con una institución a la que quisimos insuflar una vida poco mediatizada, como más delante se explica, y que se extendía a las dos salas de exposiciones, la Ateneo y la Santa Catalina, de las que se ocupaba aquel agudo crítico de arte y querido amigo que fue Carlos Antonio Areán.

El secretario general que propusimos para el Ateneo, Ramón Solís, era esencialmente un hombre de letras —ganador del Premio Fastenrath de la Real Academia Española—, que se sumaba con sensibilidad al esfuerzo de hacer de la nueva *Estafeta* una gran revista quincenal. Luis quiso dejar la dirección en febrero de 1968 y Ramón la dirigió durante el resto de mi etapa en el MIT. En su artículo de «Adiós» dejó Luis escrito que accedió a la dirección «con el signo de lo que se ha llamado *apertura*». Y añadió: «Bien sabe Dios que con el signo pero sin la consigna, porque Fraga Iribarne y Robles Piquer no montaron consignas teóricas, doctrinales, expresas, vetos ni salvoconductos, inquisiciones ni privilegios. Al contrario. Desmontaban estos aparatos acostumbrados, con el ademán de quien no pone puertas al campo.» La verdad es que la colección de «nuestra» *Estafeta* me satisface cuando la hojeo. Y no quiero alargar este ejercicio de autocomplacencia...

Los venerables ateneos, centros decimonónicos de cultura y diálogo, comenzaban a gozar de nueva vida y procuramos ayudar a su extensión por toda España.

Por eso organizamos en 1963 un I Congreso Nacional de Ateneos que se celebró en Santander. La novedad más importante ocurrió en el

Ateneo de Madrid, en su sede de la calle del Prado donde continúa. Fraga me dijo que seguiríamos dándole ayuda, no pequeña; y que, quizá, debíamos interrumpir la costumbre establecida en 1939 de que ejerciera su presidencia el director general de Información para devolver al Ateneo una personalidad propia y autónoma. Me pareció muy bien, y él buscó a un gran presidente, el académico de la Española don José María de Cossío, autor —entre otras obras— de la gran enciclopedia sobre los toros. Era hombre que había revelado su sensibilidad, por ejemplo, con el afecto y la ayuda que dio al gran poeta Miguel Hernández en sus tiempos de persecución. Fue, en aquellos años, un buen presidente, con vocales en su directiva de la categoría de la condesa de Campo-Alange, la celebrada y atrevida autora de *La secreta guerra de los sexos*, publicada por *Revista de Occidente* en 1948, del gran pintor Godofredo Ortega Muñoz, de poetas como Gerardo Diego, Luis Rosales y José García Nieto, del arquitecto Miguel Fisac, de economistas como el profesor Andrés Álvarez, de médicos como el doctor Rof Carballo, de profesores como José Camón Aznar... Cossío presidió admirable y generosamente el Ateneo hasta 1971. Me tocó exponer en esa junta previa un programa de posibles actividades que luego fue estudiado, modificado y aplicado por ellos. En su mayoría, lo llevamos adelante en aquellos años incluyendo en él algún éxito tan resonante como el de la conferencia que allí dio Konrad Adenauer en su primera visita a España, en febrero de 1967.

Más adelante —en 1969—, celebramos en el Ateneo Guipuzcoano de San Sebastián el I Congreso Nacional de Escritores, que inauguró Cela y en el que, al clausurarlo, recordé la bella definición que Martínez de la Rosa había dado de los ateneos al llamarlos «treguas de la sabiduría». Trabajaron mucho en su preparación y desarrollo el presidente del donostiarra, Javier Arbide, y una buena escritora, Mercedes Sáenz-Alonso de Aizpurúa, que era su vicepresidenta. En aquel congreso fue premiado Rafael Guillén, que había recuperado su Granada para la poesía años después de la bárbara tragedia de Lorca; y, además, tratamos un tema de tanta importancia para los escritores como lo era su acceso a algún sistema de protección social.

En ese mismo año se inauguró el de Málaga con unos actos en los que intervinieron, por ejemplo, intelectuales de la categoría de Alfonso Canales, José María Souvirón, José Antonio Muñoz Rojas, Ramón Tamames, Manuel Alcántara y Federico Sopena. Eran actos que seguramente no podían complacer a los custodios de la pureza ideológica del Régimen, de lo que da idea el dato de que el nuevo Ateneo convocaba,

entre otros, un premio internacional de arte con el nombre de Picasso; y allí se repartieron unas hojas con un entusiasta homenaje autógrafo al gran pintor malagueño, redactado y firmado por Rafael Alberti. No eran, ciertamente, dos ardorosos franquistas... El programa impreso dice que yo presidiría esa ceremonia, como era mi deseo. Pero no pudo ser, porque, pocos días antes, se produjo el relevo ministerial que puso fin a nuestros años de trabajo en Información y Turismo.

Creo que nuestras *Estafeta* y *Poesía Española* fueron dos excelentes revistas, más innovadora aquella, más clásica ésta, y que en sus páginas participaron o fueron estudiados los componentes de aquella copiosa y floreciente «vegetación del páramo» que glosó Julián Marías en un texto memorable que muchos nunca le perdonaron, y que publicó en *La Vanguardia* de Barcelona el 19 de noviembre de 1976, exactamente un año menos un día después de la muerte de Franco. Y esto no lo escribí, por cierto, un «camisa vieja» o un conocido franquista, sino quien había sido injustamente sancionado y molestado por el Régimen a causa, creo, de viejas querellas personales, como ha relatado bien el profesor Heliodoro Carpintero en su libro *Julián Marías. Una vida en la verdad*, Biblioteca Nueva, 2008.

No muchos años después, el historiador Ricardo de la Cierva dedicó, según sus palabras, «muchas horas a meditar sobre la organización pública de nuestra promoción cultural». Para él, no es deseable que la promoción de la cultura deba centrarse en un ministerio distinto al de Educación, que sólo podría ser el de Información. Y me cita al aludir a «las excepciones beneméritas como la de Carlos Robles Piquer, que convirtió en casa de cultura las cuevas de la censura». (*Crónicas de la Transición. De la muerte de Carrero a la proclamación del Rey*, Planeta, Barcelona, 1975, p. 152.) Le agradezco un juicio tan benévolo.

Las otras lenguas españolas

Una de las medidas que propuse a mi llegada a la dirección general fue terminar con la discriminación lingüística en el campo editorial. Aunque comparativamente pocos, en España se imprimían libros en francés, inglés y otros idiomas. Estaba en cambio muy limitada la edición en las otras lenguas españolas, tanto que había algunos catalanes que compraban todos los libros editados en su lengua materna para asegurar su pervivencia literaria. Al aplicar desde 1962 la censura previa, tratamos

(pues siempre tuve el respaldo del ministro) de extender la apertura a las lenguas españolas distintas del castellano, donde el cierre que encontramos era casi a cal y canto. Por ejemplo, la norma usual —creo que no escrita, aunque en vigor— para el catalán era la de aceptar la reedición de libros anteriores al año 1800.

Estuve en seguida en Barcelona y me reuní con el profesor Jaime Delgado, catedrático de Historia de América en aquella universidad y viejo amigo, que acababa de ser nombrado delegado del ministerio en una provincia que editaba, más o menos, el mismo número anual de títulos que Madrid. Le acompañaban algunos escritores como, por ejemplo, Albert Manent, que ratificó años más tarde en un diario barcelonés lo que aquí digo. Me expusieron el problema y les contesté que no veía razón para discriminar una lengua española respecto a otra. Fraga confirmó esa sencilla frase; y así operamos. Los ejemplos son muchos: por ejemplo, Antoni Badia i Margarit pudo editar su *Llengua i cultura als països catalans* en 1964 (que en 1980 llegó a su séptima edición), y su estudio sobre *La llengua dels barcelonins* en 1969. Manuel de Pedrolo publicó en 1966 *Perquè ha mort una noia* y *Solució de continuïtat*. Todo ello dio origen al catálogo del que se habla al tratar, en seguida, del INLE.

Muchos no aprobaron esa política lingüística; recuerdo que la criticó, ante mí, por ejemplo, Gonzalo Fernández de la Mora, un compañero y buen amigo que un cuarto de siglo después escribiría contra «la reanimación de mortecinos dialectos» describiendo el porvenir de nuestra patria como «un archipiélago de miniculturas provinciales, una reserva para los antropólogos del mañana» (*Los errores del cambio*, Plaza & Janés Editores, S. A., Barcelona, 1986, p. 191). Recuerdo haberle dicho que el uso de la lengua materna nos parecía un derecho natural.

Acabar con esa restricción puede parecer hoy cosa fácil; entonces fue un atrevimiento que ha sido recordado con gratitud por algunos, aunque pocos. El fruto fue, por ejemplo, la edición anual por el INLE en Barcelona, a iniciativa mía y desde 1967, de copiosos catálogos de libros en ese idioma español. Recuerdo, por cierto, que el amigo Matons me trajo la maqueta que aprobé, con una excepción. El volumen se llamaba, en el proyecto, *Llibres catalans* y pedí que se cambiara a *Llibres en català*, como así fue. ¿Acaso querían negar que fuesen catalanes los libros allá editados en español o en otras lenguas? Es oportuno recordarlo cuando un *conseller* de Cultura de la Generalitat catalana ha manifestado en la Feria del Libro de Frankfurt lo contrario, esto es, que sólo es catalana la literatura que se escribe y edita en catalán. Es una voluntad

de automutilación que me sorprendería siempre, quizá algo menos, si no fuera tan persistente el dato de que los catalanes compran la inmensa mayoría de sus diarios editados en español/castellano. Es una observación, además, que viene del mismo político que, hace pocos años, respondió en Madrid una pregunta mía reconociendo que de los veintiún mil volúmenes editados en Cataluña en el año 2006 (de un total de unos setenta mil en toda España), sólo ocho mil lo habían sido en lo que antes se llamaba, sin que casi nadie se ofendiera, la lengua vernácula.

Seguiré aquí con el tema catalán: tuve la valiosa ayuda de Félix Ros, un barcelonés que en 1940 había ganado una cátedra de Lengua y Literatura Española, y no sólo era un bilingüe perfecto, sino que tenía criterio, sabía distinguir el texto literario del panfleto inteligente y me ayudó, a veces, cuando mis colaboradores y yo mismo dudábamos ante un texto en su lengua materna. Quizá lo más importante que hizo Félix fue aceptar mi encargo de preparar una *Antología poética de la lengua catalana* (puesta en versos castellanos), que Editora Nacional publicó en 1965. Es un gran libro, tanto en formato y demás aspectos materiales, como en contenido: cerca de quinientas páginas que cubren desde «la pujanza medieval» del mallorquín Ramon Llull, nacido en 1223, hasta la poeta Coloma Lleal, nacida en Ceuta en 1944. Y Ros no duda en que Editora Nacional (la del franquismo) reconozca, con Menéndez Pelayo, que «medio siglo antes de que se pudiera contar con un idioma castellano ya existía el catalán». Allí está, por ejemplo, la muy impresionante «Oda a Espanya» de Joan Maragall, cuyo verso final (el «¡Adiós España!») no podría ya ser invocado en una patria que concede a las lenguas propias de cada una de sus comunidades el máximo respeto, aunque allí no siempre lo reciba la lengua común que domina la gran mayoría de los catalanes, y que todos los españoles deben conocer y usar, según la Constitución.

Esta antología se completó con otra que, por supuesto, aceptamos después de la ley Fraga, la titulada *Un segle de poesia catalana*, publicada en 1968 y que, iniciada por Jaume Bofill i Ferro, fue terminada por Antoni Comas, con quien llegué a hacer buena amistad con ocasión de los Premios Nacionales de Literatura (que en otro lugar se trata), y que, por desdicha, murió muy joven, sólo a los cincuenta años de edad. No era, aquélla, una antología fácil: comenzaba por la célebre oda de Aribau de 1833 dedicada a la patria, es decir, la patria catalana, aquella que se expresa... en lemosín, la lengua en que «*sonà lo meu primer vagit / quan del mugró matern la dolça llet bevia*».

Empezó así a salir a luz un sentimiento que estaba adormecido, aunque no extinguido: el del catalanismo secesionista. No lo confundo, en modo alguno, con el que comparten muchos catalanes y que, aunque quizá sea allí particularmente vivo, no difiere en nada esencial del amor a sus peculiaridades que pueden sentir los nativos de otras regiones, españolas o no. Como un editor me dijo cuando ya habíamos adquirido confianza, «todos los catalanes somos catalanistas». El amor a lo propio se siente en todas las regiones, con intensidad variable. Pero algunos, y desde luego ciertos escritores, iban bastante más allá, como van ahora con la plenitud recobrada de su libertad. Que esto sea bueno o malo para el futuro de Cataluña es materia discutible; yo lo tengo sin duda por malo, a la luz de las varias experiencias históricas y aún del puro sentido común, de lo que se habla en otro lugar de estas páginas.

Apareció también el fenómeno, hoy vivo aunque muy minoritario, de los creyentes en «els Països Catalans», una expresión que acuñó —si no me equivoco— el ya citado escritor valenciano Joan Fuster, notable defensor del pancatalanismo. Para él, como para algunos más, una especie de Portugal del oriente peninsular debe ser edificado no sólo sobre el solar y el pueblo de Cataluña, sino sobre los de Baleares y Valencia; al menos hasta Orihuela, donde se habla ya la lengua castellana, a la que Fuster relegó como instrumento literario cuando «descubrió» el catalán. Lo que por cierto, parece haber ocurrido en 1962, el mismo año de nuestra llegada al ministerio y cuando él cumplía los cuarenta. Su libro clave en este sentido es *Nosaltres els valencians*. No era una doctrina que nos llenara de felicidad; pero no objetamos la edición en aquellos siete años de sus cuatro obras más significativas: el citado *Nosaltres els valencians* y *Diccionari per a ociosos*, 1964; *El hombre, medida de todas las cosas*, 1967; y *Heretgies, revoltes i sermons*, 1968. Años después, sería presidente de la Asociación de Escritores en Lengua Catalana.

Como he explicado, la ley Fraga permitió al editor consultar nuestra posición ante el libro que deseaba publicar o correr el riesgo de que la obra publicada fuera secuestrada, a la espera de la decisión judicial. Y algunos lo corrieron. Por ejemplo: un joven editor madrileño —de veintiocho años— llamado José María Alonso Alcón creó la editorial Halcón y publicó, en 1968 y en su colección de clásicos sociales, tres mil ejemplares de una bien pensada antología de párrafos de *El Capital* de Marx, destinada a que amplias capas lectoras asimilaran lo esencial de una obra que es la muy indigesta exposición de ese pensamiento. El libro fue retenido, como medida cautelar, por la delegación provincial

del ministerio en Madrid, y lo enviamos oficialmente al señor juez de Orden Público, por si éste creyera que su texto violaba la entonces vigente ley de Represión de la Masonería y el Comunismo. El juez, que se llamaba don Julián Sánchez-Escribano, no lo creyó así y levantó el secuestro, con lo que esa síntesis de Marx pudo llegar a sus destinatarios. Como puede deducirse, fue una de las editoriales que nos crearon problemas. En todo caso, la ley se cumplió; y no apelamos contra su fallo. Alonso Alcón fue, ya en democracia, alcalde de Valencia de Don Juan en la provincia de León y lideró la lucha contra la instalación allí de una central electronuclear, una opción defendible aunque no creo que ayudara a la seguridad y prosperidad de sus convecinos, como saben muy bien los burgaleses de Garoña.

¿Qué teníamos enfrente? Varias unidades en línea de combate, intelectual en lo que nos concernía. Por ejemplo: en 1966 salió a luz el muy célebre *Poeta en la calle*, de Rafael Alberti, editado en París por la Librairie du Globe en la colección Ebro. El gran poeta gaditano (no incluido por cierto en la antología de J. L. Cano, ni siquiera en las ediciones de 1972 y 1987) abre su «selección de poesía civil, 1931-1965» con una nota autobiográfica que termina con estas frases: «Yo soy Rafael Alberti, ahora en Moscú, capital de la paz. La medalla de Lenin relampaguea en mi pecho. Soy premio Lenin de la Paz. Que el corazón de España hoy se sienta también por él condecorado.» Y termina afirmando que Lenin «fue el hombre inmortal que cambió los ríos de la historia del mundo». Todo el libro está alzado en armas. Todo él es una apología de esa revolución y, por tanto, de sus horribles crímenes. Todo. No pocos ejemplares fueron filtrados a España.

(Me adelanto a relatar que unos diez años más tarde, en 1977, vinieron Sus Majestades por primera vez a Italia, donde el Rey había nacido y vivido de niño y cuyo idioma maneja con gran soltura. Era un viaje al Estado Vaticano para visitar al Papa; y quisieron recibir a los españoles en la embajada ante la Santa Sede. Como embajador ante el gobierno italiano, me tocó organizar la presencia de la colonia española, que no era muy grande. Y pensé que sería bueno traer a Alberti, en el clima de reconciliación nacional que impulsaban el Rey y el presidente Suárez. Por fortuna, conté con mi compañero Carlos Spottorno que, hombre de refinado gusto literario [lo había ya advertido años antes, en una charla en La Habana], tenía contacto con él. Aceptó venir, seguramente previa consulta a sus jefes políticos en el PCE. Lo que quería hacer, e hizo, fue entregar al Rey una petición de amnistía que, en efecto, el pri-

mer gobierno Suárez concedería pronto para delitos políticos. Al presentarlo a don Juan Carlos dije: «Majestad: Rafael Alberti, uno de los mejores poetas de España.» Algún periodista interpretó mal y publicó que yo había dicho «el mejor poeta», lo que, por supuesto, estuvo siempre lejos de mi intención; pero no faltó quien se molestara. Tampoco entre los grandes poetas escasean las suspicacias. Poco después, Alberti volvió a España y dijo aquello, muy hermoso, de que había salido con el puño cerrado y volvía con la mano abierta. Fue el nuevo Alberti que, con la Pasionaria, presidió la Mesa de Edad en el Congreso —democrático— de los Diputados, sin que ello causara ningún escándalo en aquel feliz momento reconciliador.)

El INLE y el impulso a la edición

Durante los siete años y pico en aquella dirección general, ocupé asimismo la presidencia del Consejo de Administración del INLE. Fue una tarea apasionante.

El INLE tenía precedentes. En 1901 lo fue la Asociación de la Librería Española, que luego pasó a ser una federación que incluía a los «amigos del libro». Las cámaras oficiales del libro fueron creadas a través de un real decreto en 1922. Y la Segunda República creó, sobre el papel, un Instituto del Libro que no llegó a funcionar. El franquismo recogió la idea y el Instituto Nacional del Libro Español (INLE) nació en mayo del 39, recién recuperada la paz.

El INLE actuó como una útil herramienta al servicio del libro durante ese período, pero fue suprimido poco después de la llegada de la democracia por un gobierno de Unión de Centro Democrático que, quizá, quiso huir del régimen anterior, del que procedían casi todos sus miembros. Si esto tenía sentido en algunos casos, no era ciertamente en el de esta institución, que fue admirada y hasta envidiada en muchos países, en Europa y América. La razón era muy simple: excepcionalmente, se sentaban en sus órganos rectores no sólo los editores y los libreros, a los que se sumaron algunos autores al final de mi mandato, sino altos responsables de la Administración Pública, casi siempre directores generales de ministerios económicos y culturales, que podían tomar decisiones beneficiosas o perjudiciales para el libro. Y para una nación creadora de una lengua universal, el libro era, y es, muchísimo más que una mercancía, sin ser tampoco desdeñable esta dimensión.

La Comisión Delegada General del Consejo de Administración, o este mismo consejo, que presidí en aquellos años, se reunía cada mes durante una mañana, alternativamente en Madrid y Barcelona, alguna rara vez en otras ciudades.

Desde su supresión, los empresarios del libro o de las librerías carecen de ese contacto habitual con los poderes del Estado, que sigue, por supuesto, teniendo influencia en sus labores. Ocupa, en parte, el lugar del INLE la Federación Española de Cámaras del Libro, que prefigura la nación fragmentada deseada por algunos, ya que la integran las cámaras sitas en Madrid, Barcelona y Bilbao. La primera reúne a editores y libreros de toda España menos Cataluña y el País Vasco.

La dirección de aquel instituto había sido confiada años antes a un falangista jerezano, Julián Pemartín, amigo de José Antonio Primo de Rivera, con quien se carteó antes de la guerra. Lo seguía dirigiendo cuando llegué a su presidencia, aunque, con más de sesenta años, ya no estaba en su mejor forma física. Era un gran caballero, cumplidor de sus deberes, y tuvimos muy buena relación. Falleció a los sesenta y cinco, durante mi mandato, en mayo de 1966, y le sucedió Guillermo Díaz-Plaja, el buen profesor y escritor catalán, ejemplo del más perfecto bilingüismo en su extensa obra literaria.

El trabajo en el instituto, que no era poco, recaía esencialmente en el secretario general, un gallego listísimo y zumbón llamado Eduardo Nolla, y en sus colaboradores, entre ellos su paisano Fernando Cendán Pazos, que escribió mucho en la revista y luego publicaría interesantes libros sobre temas editoriales, y el asesor jurídico, Antonio Miserachs, así como un gran periodista, Bartolomé Mostaza, que dirigió la revista mensual *El Libro Español*. Mantengo la amistad con el otro Eduardo Nolla, su hijo, muy notable especialista en el pensamiento y la obra de Alexis de Tocqueville. La oficina de Barcelona tenía como director a Augusto Matons.

Por otra parte, el consejo tenía un secretario general, un cargo que desempeñaba José Miguel de Azaola, escritor vasco nacido en los años de la guerra europea. Azaola dedicó mucho de su tiempo a escribir buenos ensayos sobre temas muy variados, porque muy amplia era su base cultural. Tuvimos siempre una relación muy afectuosa aunque yo no compartía su visión federalista de España e, incluso, del propio País Vasco unido a Navarra. Falleció en septiembre del año 2007, a los noventa años de edad.

La industria editorial ya era entonces importante y estaba bien organizada. Una anécdota lo revela: poco después del cese de Fraga, y

puesto que mi nombramiento en el INLE no había caducado todavía, acompañé a los editores y libreros de su consejo en una visita de cortesía al nuevo ministro. La charla se prolongó y en un momento comentó Sánchez Bella la importancia de la red de distribución en Italia, de donde él venía, señalando que una gran editorial, creo que Rizzoli, disponía de doce mil puntos de venta. Mi amigo y vicepresidente, que era el gran Santiago Salvat, cuyo poderoso grupo editor se estaba especializando en la publicación de fascículos periódicos, informó al nuevo ministro de que la suya era una red organizada por la Sociedad General Española de Librería, SGEL, y que, teniendo en cuenta la diferencia de población, era proporcionalmente mayor que la italiana. En ambos casos, se trataba de librerías pero, sobre todo, de quioscos de prensa. Otros datos expresivos eran los de la exportación editorial: en 1965 México importó libros españoles por valor de treinta y cinco millones de pesos mexicanos y los exportó a España por valor de cuatro millones y medio.

No nos faltaban allí los problemas; y abordarlos era nuestro trabajo de cada día. Así no fue menor el que se nos planteó a raíz del escándalo Matesa y, por tanto, de que la decisión de Fraga, en el sentido de permitir que la prensa lo tratara (como exigía la nueva Ley de Prensa), contribuyese a su salida del gobierno; porque los ministros más afectados lograron predominar en la decisión de Franco, a quien cualquier escándalo informativo disgustaba mucho, aunque hubiera aceptado en su momento esa ley.

Se descubrió entonces que un librero espabilado, uno solo, había recibido alguna ayuda a la exportación mediante el truco de enviar a un supuesto cliente americano un cargamento de viejas guías telefónicas españolas. Era un fraude, sin duda; aunque las cantidades en juego, del papelote exportado y de los dineros percibidos, no eran ni de lejos comparables con las movidas por los telares sin lanzadera. Por otra parte, los propios servicios del INLE obligaron a la rápida devolución de esa ayuda. El incidente fue utilizado con la intención de diluir el aislado fallo de control de algunos funcionarios, que creo que no se lucraron con aquella operación de maquinaria textil.

Una de las misiones propias del INLE era la organización de ferias del libro en muchas ciudades: la más importante era la nacional, que se celebraba en Madrid cada primavera, cuya inauguración revestía cierta solemnidad, con uno o varios ministros en el paseo, ante las casetas; y que servía para comprobar no sólo el aumento anual de títulos, sino la mayor variedad ideológica. Hubo también ferias en otras ciudades espa-

ñolas; y cito, por ejemplo, la del libro vasco celebrada en Bilbao en 1965, en la que intervino la Academia de la Lengua Vasca, que me tocaría legalizar años después. Uno de los argumentos que sirvió para lo que, con referencia a cierta historia de Bohemia, se llamó luego «la defenestración de Fraga» fue un informe muy crítico de esa apertura ideológica elevado al almirante Carrero, a la sazón vicepresidente del gobierno, ante quien se nos acusaba de haber dado entrada al pensamiento marxista y a los separatismos.

Hubo algunas ferias fuera de Madrid y en varios países hispanoamericanos, así como exposiciones monográficas. En Roma me tocó inaugurar la del libro católico español con motivo del Concilio Vaticano II, con mil quinientos títulos que luego fueron entregados a la Biblioteca Vaticana. Un catálogo con más de cuatro mil fichas fue editado; y un ejemplar bellamente encuadernado fue entregado por Elisa y por mí al papa Pablo VI en una audiencia privada. En aquel viaje inauguramos una librería española, Sorgente, creada por el Instituto Secular Vita et Pax Christo Iesus, que había fundado quien fue un querido amigo, el sacerdote navarro don Cornelio Urtasun, un gran español cuya lengua materna era el vascuence. De esa «fuente» romana brotó no mucho más tarde un taller que ha renovado los ornamentos litúrgicos, según el modelo del que antes crearon en Alboraya (Valencia) y que, como el resto de esa obra, dedica sus ganancias a fines benéficos en África e Iberoamérica.

Como presidente del INLE hice algunos viajes a Hispanoamérica, el gran mercado de nuestros libros. El primero no fue fácil: los editores y libreros mexicanos organizaron un congreso de nuestra área lingüística poco después de llegar yo a ese trabajo. Y allí encontré un clima más bien hostil, dada la presencia en el campo editorial de muchos españoles exilados y el omnímodo poderío de un régimen autoritario que se negaba a reconocer al establecido en España. Me tocó prometer lo que efectivamente pudimos cumplir unos tres años más tarde, la supresión de la censura previa. Por otro lado, no me fue difícil señalar a muchos críticos que estábamos en un país donde el Estado imprimía todos los libros escolares, lo que privaba a los editores privados, más que cualquier censura, de participar en esa substancial parte del mercado, al tiempo que imponía una visión unilateral de lo que los alumnos habían de aprender. El silencio siguió a mis palabras, que gustaron no poco a los editores mexicanos pero no complacieron a los portavoces de su gobierno, especialmente porque no pudieron replicar. Y nunca olvidaré lo que, en un almuerzo mano a mano en su muy elegante club privado, quiso con-

tarme, a media voz y con mucha precisión, un gran editor mexicano acerca de la barbarie que aquel gobierno era capaz de aplicar a quienes se permitieran ciertas libertades que en cualquier otro país podían tenerse por normales y aún por mínimas.

Aunque ése no era su cometido, alguna vez formulamos desde el INLE alguna invitación a un escritor. Fue el caso, por ejemplo, de Giorgos Seferis, el gran poeta griego que en 1964 fue distinguido con el Premio Nobel de Literatura. Lo trajimos a España y fue debidamente agasajado. Le di la bienvenida al ofrecerle un almuerzo en Madrid, el 24 de septiembre de aquel año, que era el mismo en el que acababa de ser aplaudido en muchas ciudades españolas el *Piraiikon Teatron*. Recordé en ellas la frecuente sintonía que se ha dado entre griegos y españoles.

Una política editorial propia

Una de nuestras tareas fue la de acometer una política editorial propia. Ello se hizo fundamentalmente por tres caminos: las publicaciones españolas de la propia dirección general, que editaban colecciones de libros como los «Temas Españoles», las «Rutas de España», «España es así», «Claves de España», «Documentos (Informativos, Sociales y Políticos)» o «Cuadernos de Arte»; y, sobre todo, el robustecimiento y la mejor organización de Editora Nacional, que publicó muchas obras y alguna tan importante como el *Naturaleza*, *Historia*, *Dios* de Javier Zubiri, varias veces reeditado aunque no sea un texto de fácil lectura. Y creo que cabe añadir los libros RTV.

Tengo ese fortalecimiento de Editora Nacional por una decisión justa y razonable. Comenzó entonces a equipararse a los organismos británicos y franceses análogos, aunque nosotros publicamos sobre todo libros y menos documentos. Fraga encontró un excelente director para la editora, el abogado navarro Jesús Uniciti Urniza, que fue eficaz, trabajador, leal y, por supuesto, de una honestidad imaculada. Tuvo, además, la fortuna de contar con un buen secretario general, Tomás Zamora. Es imposible reproducir aquí el catálogo de los libros publicados en aquellos siete años, que fueron centenares, pero citar algunos ya dará una idea. Creo que fue otro error «democrático» —sobre todo si lo cometen los socialistas, defensores de lo público— el que Editora Nacional fuera suprimida en el cambio de régimen; y apoyo esta opinión en la valiosa labor de Her Majesty's Stationery Office o en la copiosa producción de La Documentation Française donde ninguno de ambos

estados democráticos duda a la hora de publicar lo que le parece oportuno. Una cosa es reorientar su rumbo y otra suprimir aquella institución pública de un plumazo, lo que incluyó el cierre de las librerías abiertas entonces, en el mejor sitio de Madrid y en uno equivalente de Barcelona, y luego en Florida y en Buenos Aires, así como la red, todavía incipiente y ya muy necesaria, que aseguraba la distribución comercial en España de todas las publicaciones oficiales, a menudo difíciles de encontrar para quienes las necesitan. A no ser que se trate, como vemos hoy, de que el Estado nacional sea un simple residuo del que fue. El primer gobierno del PSOE se deshizo de sus fondos, por el deseo de cortar con el pasado o quizá por el de favorecer a los editores privados, aunque casi todas estas ediciones tengan poco atractivo comercial pero sean útiles a numerosos ciudadanos.

Nos correspondía una parte en la batalla ideológica de aquellos años; y no la rehuimos. Daré sólo un ejemplo, los dos grandes y gruesos volúmenes de la *Historia del Partido Comunista de España* escrita por Eduardo Comín Colomer, cada uno con unas setecientas cincuenta páginas en gran formato y encuadernados en tapa dura, que publicó Editora Nacional. Respalda cada una de sus afirmaciones por una buena documentación, propia de quien había pertenecido a aquel partido, es imposible que el lector de buena fe pueda negar la grave amenaza que aquella ideología fanática y quienes la guiaban o servían, por convicción o por interés, significaron para la vida europea; en cuyo flanco occidental-meridional habrían podido establecer un valioso satélite de la Unión Soviética, tal como, años más tarde, lo habrían podido hacer en Italia o Grecia si ambas sociedades no hubieran generado sus anticuerpos, a los que apoyaron sobre todo Estados Unidos y el Reino Unido. Ocurre, sólo, que leer libros tan extensos no suele ser un «vicio» en el que incurran con frecuencia los españoles y, mucho menos, sus políticos. Y eso permite que Carrillo, por ejemplo, reciba homenajes en Madrid la noche en que se retira la estatua de Franco del mismo lugar en el que permanece la de Largo Caballero, aquel ex colaborador de la dictadura de Primo de Rivera que luego arrojó a nuestro socialismo en los acogedores brazos de la Unión Soviética y de su aparato exterior, la Komintern y el Socorro Rojo Internacional, por ejemplo. O conduce, cuando escribo, a que el actual gobierno del PSOE considere españoles a los brigadistas que vinieron a matar españoles de un bando, pero no a otros extranjeros que disparaban contra los españoles del bando contrario. Y no deseo extenderme en este inagotable tema que, sin embargo, no debo silenciar.